



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

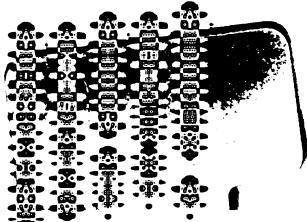
Acerca de la Búsqueda de libros de Google

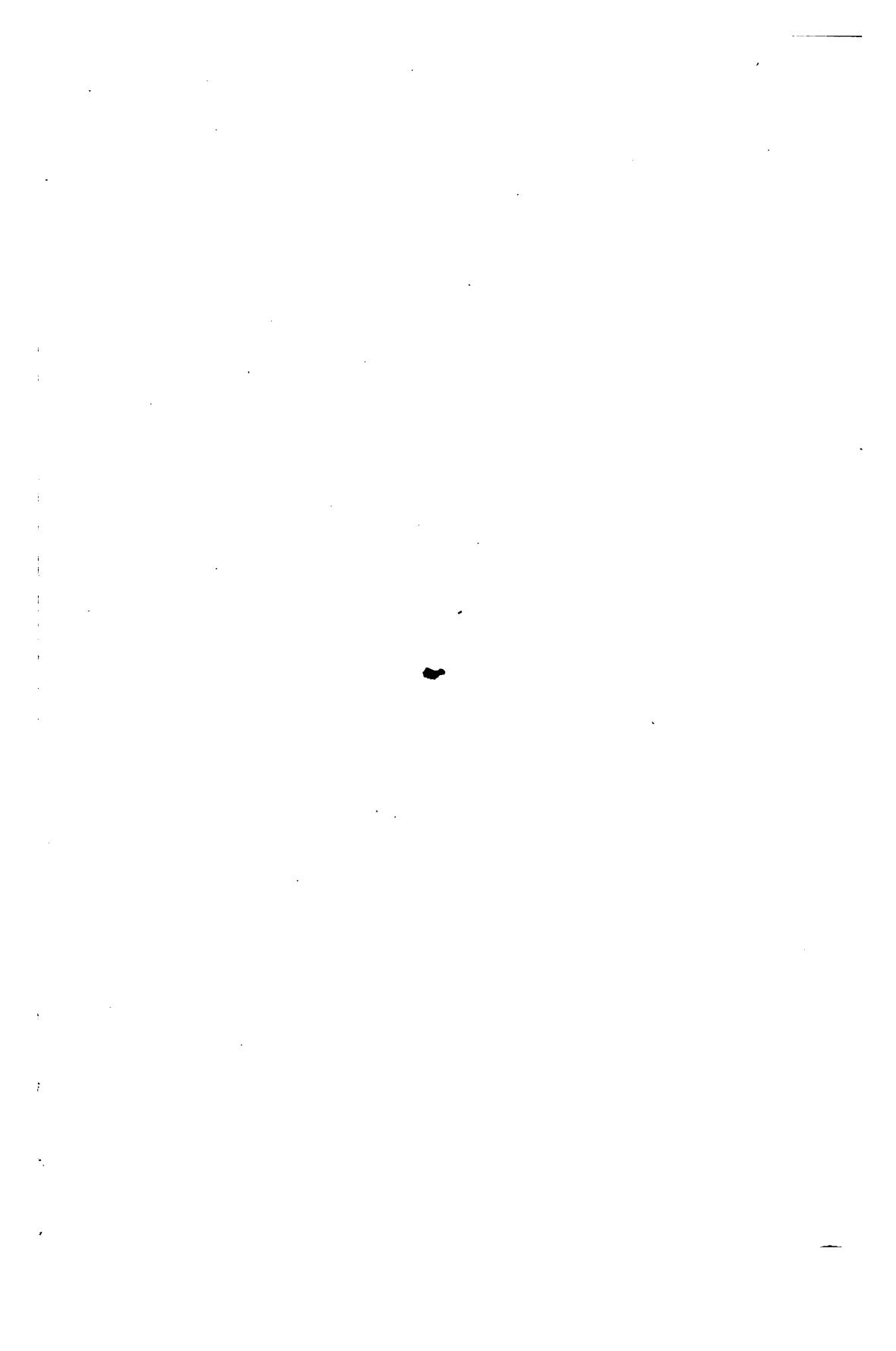
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

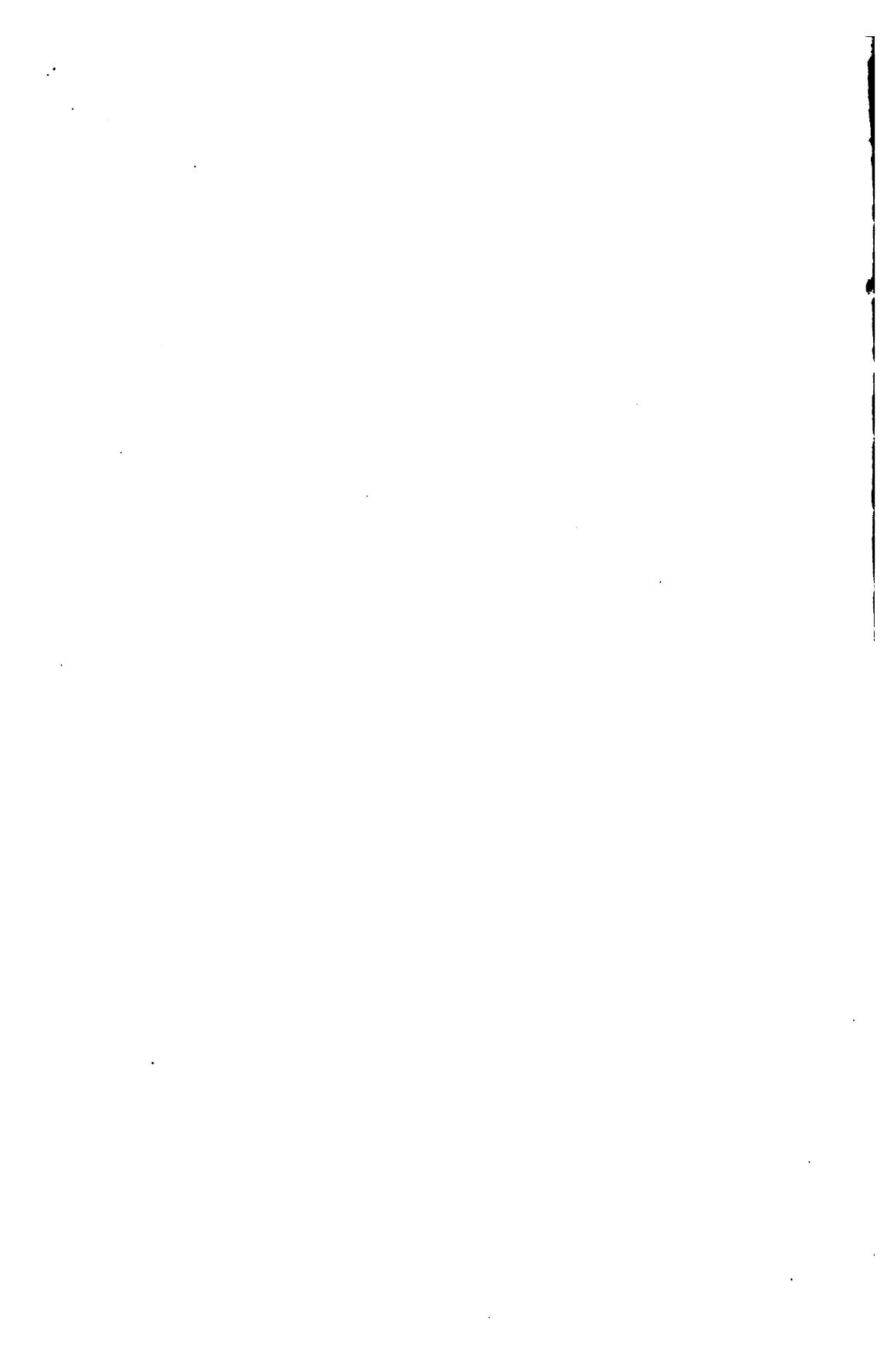
32. Oct 1915.



LIBRARY







31

ESTAMPA
MEXICANA

MEXICO,
ESTAMPA CRIMINAL.

MEXICO, 1862.

MEXICO, ESTAMPA CRIMINAL.

S
E 1714

993

TUR

CR TX

T

OXFORD CHAMBER OF COMMERCE

MAY 14 1915



SEÑOR MINISTRO.

Paralelo entre el código Penal y el de Procederes.

LA LEJISLACION penal y el Procedimiento Criminal no han progresado paralelamente en Bolivia. El Código Penal de 6 de Noviembre de 1834 ha correspondido á su objeto hasta que sea necesaria su modificacion, en época en que la Nacion pueda poséer felizmente una penitenciaria. Entre tanto, su sistema, sus disposiciones generales, sus definiciones, sus divisiones lógicas y su penalidad filosófica y proporcionada, tienden á determinar con precision la violacion del Derecho y la pena consiguiente á esta violacion. Tal es el objeto que segun la ciencia debe tener un Código Penal.

Con razon ha merecido el de Bolivia justos aplausos

en América y Europa, apesar de la inexactitud y de algunas equivocaciones en su redaccion, efecto de la precipitacion con qué, casi en la víspera de la clausura de las sesiones de las Cámaras Lejislativas, se sacaron los dos ejemplares del Código para su sancion.

Juicio sobre el Código de Procedimientos.

El Procedimiento Criminal de 14 de Noviembre de 1832, si se exceptúa la prohibicion del juramento que antes prestaban los encausados en su declaracion indagatoria y en su confesion, es el enjuiciamiento de intimidacion, enjuiciamiento inquisitorial, invencion de las Constituciones Imperiales y de las leyes feudales y canónicas que adoptada integralmente por España, pasó á América. En vano se buscarán en él las estaciones diferentes del juicio criminal, dirijidas por diversos jueces, la citacion del acusado, las pruebas orales y la publicidad del juicio. Un solo juez instruye en secreto el sumario, él mismo decreta la acusacion, ante él mismo se dan las pruebas en secreto, y él mismo falla la causa sobre el hecho y el derecho. Un solo juez viene á ser el único elemento de la instruccion, de la acusacion, de las pruebas escritas y de la sentencia que tampoco está obligado á motivar. En este procedimiento hay una disigualdad repugnante entre las partes que discuten: todas las garantias son para la sociedad, muy pocas tiene el acusado.

La penalidad de nuestra lejislacion ha seguido el movimiento de las ideas y de las costumbres, se puede decir que en ella estan formulados, como leyes, los pensamientos de Cesar Beccaria, de Jeremias Benthan y de otros sabios filosofos, politicos y criminalistas qne consagraron sus vijilias al bien de la humanidad; mientras que en el Código, llamado de Procederes, subsis-

ten todavía los resabios de la edad media. Comparados ambos Códigos forman un anácronismo inconciliable. ¿Qué le importa al Bolívian la suavidad de las penas en su legislación y la magnificencia de las garantías constitucionales, si sujeto á un procedimiento vicioso, puede ser declarado culpable, siendo inocente, ó sufrir mas cruelmente, aun siendo criminal, durante un procedimiento inícuo, que en la ejecución de la sentencia más injusta?

La reforma del Código de Procederes era pues una necesidad, urgente reclamada por la ciencia, por las costumbres y por el estado político de Bolivia. La ley de 11 de Noviembre de 1846 la ordenó, y autorizó al Gobierno para nombrar una comision. Compuesta élla de notabilidades irrecusables, presentó sus trabajos en 1857 que adoptados como ley del Estado, fueron publicados en 8 de Febrero de 1858 bajo el título «Ley del Procedimiento Criminal.»

El derecho, como ciencia, es cosmopolita y tiende á traspasar todas las fronteras para instalarse en cuantos pueblos encuentra analogías y semejanzas. El siglo pasado y particularmente el presente, manifiestan esta propaganda de que son tambien un testimonio vivo nuestras Constituciones, nuestro Código Civil y Penal, nuestro sistema de instrucción, y por fin, todas nuestras instituciones, desde 1825 á esta parte. Inglaterra y especialmente Francia están á la cabeza de esta propaganda; y no fué extraño que la Comisión Codificadora hubiese vertido al español el Procedimiento Criminal francés, con modificaciones que creyó adaptables á nuestra situación. Es pues nuestro enjuiciamiento criminal el Procedimiento Criminal francés; pero sin su base que es el Jurado y sin su cúspide—la Corte de Casación, que no solo es el mejor ornato de la legislación francesa, sino tambien el punto donde la ciencia, la experiencia y la probidad clavan lenta y trabajo-

samente la uniformidad de la jurisprudencia, mas necesaria aun que la uniformidad de la legislacion.

Reformas que ha introducido el Procedimiento criminal.

El Procedimiento Criminal ha introducido laudables reformas. Aunque deja abandonado al sindicado á una incertidumbre cruel, durante el secreto inquisitorial de la primera instruccion hasta la víspera del debate, aunque no ha separado el juicio del hecho del de derecho y aunque en materia criminal ha dejado la libertad, el honor y la vida al juicio de dos jueces inapelables, ha aceptado la importante institucion de la policia judicial y del misterio público, que representando á la sociedad en sus intereses morales, averigua y comprueba delitos, reune las pruebas, persigue á los delincuentes y los somete á los tribunales competentes.

Ha aceptado tambien los juicios de simple policia, el correccional y el criminal, señalando los tribunales que deben entender en ellos, siguiendo la gradacion y proporcion de los males del delito y de la pena.

Ha dividido el Procedimiento Criminal en el que la sociedad y el causado discuten sobre los mas vitales intereses del hombre, en tres fases ó estaciones que son la mas sólida garantia del acierto, encargando la instruccion á un juez al ministerio y á la policia judicial; la acusacion á un tribunal superior que examina de nuevo, para decretarla, la gravedad del delito y la suficiencia de las pruebas contra el sindicado; y el debate y la sentencia, al Tribunal de Partido, prohibiendo que el juez que intervino en una de estas gradaciones, pueda conocer en las demás.

Censura del Procedimiento Crim-

inal y su estado actual.

Es difícil que pasando el Procedimiento por estas fases en que funcionan diferentes jueces y tribunales y que pueden llamarse los espurgatorios ó tamices del juicio criminal, puedan llegar desapercibidos hasta la sentencia, los errores ó prevaricaciones de la instrucción ó de la acusación. No son estas garantías insignificantes para que pudiéramos renunciarlas; pero al lado de ellas el Procedimiento Criminal encierra vicios que condena la ciencia y contra los que ha protestado la práctica.

El Procedimiento Criminal concede los recursos de apelación y nulidad en el juicio correccional y de simple policía; mas en materia criminal solo franquea el de casación, sin otra razón que la ciega sujeción al Procedimiento francés cuyo sistema es diferente en materia criminal, basado en la separación del juicio de hecho del de derecho, en que el juicio sobre el hecho, no es escrito sino oral, y en que los jueces de hecho que son doce, fallan según su conciencia. No se concibe que fuera posible la apelación de sentencias pronunciadas en semejante juicio.

Mas sustituir un tribunal de tres jueces que conocen al mismo tiempo del hecho y del derecho, á doce jurados que fallan sobre el hecho y á tres magistrados, á lo menos, que aplican el derecho, siendo difícil y casi imposible el juicio oral por la situación de los tribunales de partido, donde no pueden concurrir los testigos del delito; la sujeción servil al procedimiento francés produjo en la práctica su efecto natural—la confusión, la alarma, el profundo pesar de los hombres de lei y el trastorno de las formas protectoras de la justicia.

La topografía de Bolivia y la ninguna confianza que inspira un tribunal inapelable que con dos votos puede dis-

poner soberanamente del honor, de la libertad y de la vida, sublevaron la opinion contra semejante procedimiento. Reducidos á doce los treinta y dos partidos judiciales que habia ántes, forzados los testigos á atravesar largas distancias, á abandonar su familia, su trabajo y su hacienda, menoscabandola con los costos de un viaje y de una indefinida residencia cerca del tribunal, y desengañados por fin, de una indemnizacion ofrecida y no cumplida, huyen de la citacion como del cólera; y sin testigos no puede haber debate, juicio ni sentencia.

El legislador del Procedimiento Criminal conocio que su teoria no era aplicable, pero creyó allanar dificultades invencibles, suprimiendo el juicio oral y ordenando que las deposiciones en el debate fuesen escritas, que no compareciendo á él los testigos del sumario, se lean sus declaraciones instructivas, y que la Corte de Casacion, dejando de ser Corte de Casacion, conozca como tribunal de segunda instancia, de las causas criminales, aprecie las pruebas y califique los delitos. ¡Cantos errores contra la ciencia! ¡Cuántas garantias destruidas!

El Ministro de Justicia que refrendó el Procedimiento Criminal y lo reformó tambien, dijo en el Mensaje que dirigió á la Asamblea Nacional el 1.^o de Mayo de 1862. «Poco tiempo despues de planteado el sistema de Organizacion judicial y el Procedimiento Criminal vigente, principiaron á notarse graves dificultades en la práctica, y las reformas que se han hecho para obviarlas han desvirtuado todo el sistema, sin conseguir satisfactoriamente su objeto.»—Triste confesion, pero injénua que debe servir de ejemplo á los hacedores de leyes, para contenerlos en los límites de la ciencia y del respeto á la soberanía nacional.

La Asamblea desatendió esta importante indicacion y

los proyectos que varios de sus miembros, competentes en la materia, le presentaron para hacer aplicable el Procedimiento Criminal, respetando su sistema. Al contrario dejó subsistir y aprobó la Organización judicial y el Procedimiento ante los tribunales de partido, con esas graves dificultades y reformas absurdas que habían desvirtuado el sistema.

Prescindiendo de otros puntos de menor importancia, tal es el estado actual del Procedimiento Criminal cuya reforma se ha servido encomendarme V. G.

Proyecto de la reforma del Procedimiento Criminal, ajustado á la Constitucion.

El proyecto que tengo el honor de presentarle es obligado y subordinado como no podía dejar de ser, á la ley fundamental, á la de 15 de Agosto de 1861 y al decreto de 24 de Marzo de este año que han reconocido formalmente á los jueces instructores y á los vocales de los tribunales de partido. Sin este respeto á la Carta que debe ser religioso, yo habría ofrecido á V. G. otro proyecto que hubiese combinado los elementos de la filosofía y de la práctica en materia criminal, respetando por otra parte el Procedimiento Criminal que como he dicho ya, es conforme á la ciencia del siglo y ofrece mayores garantías que el Código de Procederes.

Límites de la accion criminal y utilidad de la institucion del ministerio público.

La accion criminal, al parecer, encomendada absolutamente y sin ninguna restriccion al ministerio público por el artículo 1.º del Procedimiento Criminal, está limitada por el Proyecto, como lo está por el procedimiento francés, y mas por la jurisprudencia de las sentencias; pero como ésta es

casi desconocida en Bolivia donde la bibliografia del derecho es escasa, he formulado las excepciones en el Proyecto (articulo 4.º) para que se conozcan los justos limites de la accion criminal, en las causas de simple policia, en las correccionales y en las criminales y la naturaleza de las acciones criminal y civil, que aunque nacidas de un mismo ~~derecho~~, de un origen comun, se distinguen por su objeto y por el interes diferente que representan.

En los tiempos heróicos de Grecia y Roma y entre los pueblos bárbaros, la venganza de las personas ofendidas y de sus familias, era el fundamento de la accion criminal y el origen que lejitimaba la represion: eran las guerras privadas las que espiaban los delitos. La queja ó la acusacion sucedió á la fuerza: este fué el primer paso de la civilizacion; pero desconocido todavia el interes social, la represion estuvo siempre librada á la accion del ofendido. Posteriormente y cuando en el decurso de los siglos empezaba á adquirirse ideas exactas de los males del delito, que si causaba ofensas particulares, ultrajaba tambien la lei y atacaba la sociedad, el *yo* ó el interes personal fué perdiendo su prepotencia, y el derecho de acusar se comparto entre el poder público y las personas ofendidas que conservaban todavia la facultad de transar y de renunciar que extinguia la accion de la sociedad.

La historia del derecho criminal apenas ofrece un hecho mas variable y fluctuante, como el derecho de la acusacion, acomodado, mas que á otra influencia, á la politica dominante, hasta que en el siglo pasado y en el presente, la ciencia y la legislacion, reconociendo la utilidad y necesidad de la division de las acciones criminal y civil, han encargado el ejercicio de la primera al acusador público, dejando el de la accion civil á la parte ofendida. De esta manera la lei, sin

impedir la accion civil, y mas bien coadyubando á su mas libre ejercicio, ha separado del seno de las familias el veneno de la venganza, encargando á funcionarios públicos responsables que representan la sociedad, el ejercicio de la accion criminal, que no puede ser ya ~~burlada~~ por la inconstancia y la connivencia de la parte civil con el delincuente. Bolivia debe ser grata á la Comisión Codificadora por la implantacion en sus Códigos de esta institucion feliz.

Sin embargo, el Proyecto en los juicios de simple policia y de corrección en los que el interes civil juega un rol no menos importante que la vindicta pública, ha dado á la parte civil una participación casi directa, de la accion criminal. El ofendido puede querellarse y denunciar directamente ante el juez, puede coadyubar á la policia judicial, y apelando aunque no sea sino por sus intereses civiles, conserva la accion criminal, apesar del silencio del ministerio público. En materia criminal, la parte civil puede tambien coadyubar á la policia judicial y al ministerio público para la reunion de las pruebas y para instar el breve curso de los sumarios y procesos; pero no podrá demandar pena ni interponer ningun recurso ordinario ó extraordinario, no siendo por sus intereses civiles. Con esta intervencion se evitara que el ministerio buble con su inaccion los derechos de la sociedad y de la parte ofendida, sospecha que hoy se abriga jeneralmente contra el ministerio público y los jueces instructores cuya negligencia reprime el Proyecto en el Capitulo 4.^o titulo 5.^o

Casos en que cesa la accion del ministerio público.

El articulo 4.^o del Proyecto propone cinco casos en que la reconciliacion, suspendiendo el ejercicio de la accion criminal, pone fin á todo procedimiento. Absolviendo el le-

jislador la accion del ministerio público carece de objeto.

El ministerio público sujeto á la autoridad de los Tribunales ante quienes funciona.

No comprendo la razon [por la que el artículo 9 del Procedimiento criminal, separándose del texto frances, hubiese sometido la policia judicial á la autoridad de los fiscales de distrito, y menos comprendo como perteneciendo el fiscal general á la policia judicial, pueda estar subordinado á la autoridad del de distrito. Los fiscales, en efecto, deben pertenecer á la policia judicial bajo la autoridad de los tribunales ante quienes funcionan. Todos los Tribunales ejercen Jurisdicción criminal, inclusa la Corte Suprema, que segun la Constitucion debe juzgar á ciertos funcionarios públicos: por consiguiente los fiscales, como los demás oficiales de la policia judicial, cuya misión es comprobar los delitos y buscar las pruebas, deben ejercer estas funciones ante los tribunales donde representan á la Sociedad, y bajo la autoridad de ellos, sin perjuicio de estar tambien sujetos en su jerarquia legal á sus superiores inmediatos. Colocados los fiscales bajo esta doble vigilancia, es difícil que quede impugne ningun delito, que es el fin de la lejislacion madre y de los artículos 1.º y 13º del Proyecto.

Los alcaldes de barrio y de campo, funcionarios reconocidos por la ley, y que prestan servicios positivos en la administracion y la policia judicial, fueron olvidados en el Procedimiento criminal. Auxiliares necesarios, particularmente en el campo, han sido comprendidos en el Proyecto entre los funcionarios que pertenecen á la policia judicial. Si se conoce el objeto de ella en la administracion de la justicia criminal,

esta será mas expedita, cuantos mas auxiliares tenga para el servicio público.

Allanamiento de las casas y formas tutelares de su inviolabilidad.

Hay varios casos en que la policía judicial y los jueces instructores están obligados á requisar las casas para la aprehension de los delincuentes y de los objetos de comprobacion de los delitos. Faltaba en el Procedimiento criminal una sección que consagrara las formas tutelares de la inviolabilidad de las casas, aun cuando el interés jeneral demande su allanamiento. A este propósito encontrará V. G. en el Proyecto una sección que es la siguiente á la que habla del procedimiento de los fiscales en caso de delito infraganti. Se reconoce tambien en ella el derecho de la policía judicial para el allanamiento de la casa de los ministros extranjeros en casos urgentes, y cuando ella no puede entendense con el Secretario de Relaciones Exteriores. La independencia de los ministros diplomáticos no puede absorver enteramente la independencia del Gobierno, ni puede concebirse que en el territorio nacional haya un territorio independiente que sea el asilo de los delincuentes y talvez el foco de conspiraciones. El artículo 57 del Proyecto es una excepcion de la inmunidad de las casas de los ministros extranjeros, excepcion reconocida por los jentistas.

Garantia de la libertad individual.

El Proyecto (artículo 100) define los mandamientos de comparendo, aprehension, detencion y prision. En la práctica se han confundido estos mandamientos con menoscabo de la libertad individual. Esta definicion y reconocido el principio de que no hay lugar á los mandamientos de prision, sino con-

tra los delincuentes, acreedores á pena corporal ó infamante, hará difícil la detención arbitraria.

Nombramiento que hace el sindicado de defensor y funciones de este en la declaración indagatoria.

En la instrucción sumaria, que no tiene otro objeto que preparar y fundar la acusación, el Proyecto, sin travar cuestión positiva entre el acusador público y el sindicado y que no es posible aun en semejante estado, ha alzado la intimidación y el secreto del procedimiento criminal, con el nombramiento de defensor que debe hacer el sindicado, para prestar su declaración indagatoria. Aunque esta declaración la presta, mas como testigo del hecho que como autor de él, ella, el nombramiento de defensor, y el mandamiento de prisión que debe expresar el delito por el que es inculpado, y citar la ley que lo caracteriza, revelan al sindicado la causa de su prisión que no puede serle ya misteriosa.

El procedimiento más liberal que ofrece la historia del Derecho, en materia criminal, es el de Inglaterra, donde el sindicado, acompañado de su *attorney* ó defensor, presta su declaración indagatoria, y conociendo su situación por el interrogatorio que le ha dirigido el juez de paz y por el mandamiento de su prisión, prepara sus pruebas y su defensa, no para presentarlas al gran Juri ó Juri de acusación, sino ante el pequeño Juri ó de calificación que debe absolverle, ó condenarle. La ley inglesa no ha temido que un delincuente pueda burlarse de la justicia, tentando tal vez el soborno para negarle la citación que es de todo derecho y que las leyes civiles conceden en todas partes sin este temor, en las demandas civiles. Cualquiera que sea el interés en estas causas, no puede ser tan caro é importante como el honor, la libertad y la vida en las causas cri-

minales. Es pues un cruel contrasentido citar con la demanda civil á una persona sin temer que ella con este conocimiento anticipado, pueda burlar la justicia, y negarla en los procesos criminales.

La presencia del defensor en la declaración indagatoria y en la confesión, ofrece todavía otra mas sólida garantía. El defensor es el centinela de la libertad del sindicado, para evitar promesas, amenazas, sujestedes y otros artificios dolosos que pudieran emplearse, para arrancarle una confesión ruinosa. Esté autorizado ademas el defensor, para solicitar del juez, concluido el interrogatorio, la explicación de preguntas é respuestas equivocadas, y la declaración sobre hechos, circunstancias y personas que puede concurrir al descubrimiento de la verdad.

Simplificación de los Tribunales de simple policía, en 2.º instancia y su competencia.

El Código penal francés divide en tres clases las infracciones de la ley: contravenciones, delitos y crímenes; é impone para el castigo de las primeras, penas de policía, para el de los delitos, penas correccionales, y para los crímenes pena corporal ó infamante. De manera que la penalidad de estas infracciones, impuesta por el mismo Código, constituye la competencia de los Tribunales, llamados de Policía, Correccional y Corte de Assises. El Código penal boliviano no hace esta clasificación, y aunque divide las infracciones de ley en delitos y culpas, no especifica las penas correspondientes á estas. El Procedimiento criminal, á falta de una regla cierta como la francesa, ha establecido los tres tribunales, dándoles una competencia, que aunque no cabe equivocarla, no satisface á la necesidad de una pronta y cumplida administración de justicia. especial-

mente en materia de policía cuyo reglamento en Bolivia es incompleto. Resulta de aquí que permanezcan inactivos los tribunales de simple policía, encargados de reprimir los abusos que se cometan en cada municipio.

Parece que el Consejo de Estado se ocupa en un proyecto de reglamento general de policía que formará el complemento del Código penal y pondrá en acción a los tribunales de policía, a quienes el Proyecto los autoriza para aplicar las penas que imponen, no solo los reglamentos generales de policía, sino también los municipales y los bandos, en los límites señalados por el artículo 415.

Como la penalidad y los intereses civiles que resultan de una contravención a los reglamentos generales, municipales y bandos de policía, no son graves ni muy importantes, el Proyecto ha simplificado el tribunal de apelación, atribuyendo el conocimiento de este recurso solo al juez instructor. Este recurso y el de nulidad satisfacen cumplidamente todas las necesidades de la administración de justicia en este ramo, particularmente cuando se trata de la libertad individual.

Salas de acusación su competencia, remedios contra sus abusos.

Concluido el sumario, concluyen también las funciones de la policía judicial y del juez instructor. Antes que el sindicado sea sometido al Tribunal de partido y a los vejámenes del juicio criminal, es necesario que el sumario sufra un segundo examen ante un tribunal superior que pese escrupulosamente los cargos que resulten contra el sindicado y ofrezcan una garantía de la sociedad y del individuo; mas debiendo entender las Cortes de distrito en segunda instancia, en Sala plena, pa-

rece que la acusacion debia decretar otro tribunal ó otra Corte que no sea la del distrito á que pertenece el tribunal de ~~partido~~ do que debe juzgar... La de otro distrito pedja decretarla, alterpando esta función entre todas las Cortes de la República; mas las distancias y la demora consiguiente eran una rémora para la pronta administración de justicia, y mas considerándose que las salas de acusacion son tambien tribunales de apelación de los jueces instructores, en materia de libertad provisional y de la remisión de los sumarios al Tribunal correccional & de simple policía. En estos casos seria muy costoso el reenvío de los partes fuera de su distrito judicial.

Por estos motivos el Proyecto ha dejado la acusación á la sala del distrito á que pertenece el juez de la instrucción sumaria, reintegrando la Corte del distrito para los casos de apelación en materia criminal con los Con jueces del número.

El Procedimiento criminal es incompleto y aun obscuro en los recursos de nulidad que pueden provocarse contra los autos de la Sala de acusación. El mismo defecto tiene el procedimiento francés, y solo la jurisprudencia de la Corte de Casación ha aclarado el sentido de las leyes del Procedimiento en esta parte. El Proyecto ha suplido esta deficiencia declarando no haber lugar á ningun recurso contra los autos de sobreseimiento, excepto el caso en que él esté fundado en no ser delito, comprendido en la ley penal, el hecho imputado al sindicado. El auto de sobreseimiento no es sentencia definitiva; ni estingue la acción criminal, ni la civil sino cuando ambas han sido prescritas; pero durante el término de la prescripción, resultando nuevos indicios y cargos contra el sindicado, reviven la acción criminal y civil y hay lugar á un nuevo procedimiento. El artículo 259 del Proyecto evitará recursos inútiles que por la mala inteligenza de la ley se interponen diariamente ante la Corte Suprema.

... culpable, sin recurso humano, ... la responsabilidad. La so- ... spanto en las calles al ver- ... declarados inocentes, y a la Cor- ... ontener el mal. Demasiado ... sables las cuestiones que de él ... se desentendiera de una pron- ... la Corte Suprema instó de ... suelta por dos decretos de ... que á juicio del Ministro que ... sistema. Estos decretos su- ... siendo el juicio escrito y des- ... la Corte de Casacion, la ... instancia, pasando por salto ... tribunales natos de apelacion, ... de las pruebas escritas de ... de los tribunales de par- ... derecho, de manera que bajo los ... la Corte de Casacion y de la Corte de Cas- ... grado de apelacion, dejan- ... tolerables este salto inmo- ... petido hasta la Corte Suprema ... Casacion, en materia criminal, si ... para regularizar ésta las sentencias de los ... en el proceso las pruebas ... defensores del juicio escri- ... No, no es esta la prueba ... noviembre: ellos disponen ... presencia en el exterior, desa- ... capacidad física ó mental de todos ... proceda al debate con solo la

En todo juicio son elementos necesarios, indispensables la instrucción y el convencimiento del juez por medio de las pruebas, recibidas con citación de las partes y discutidas por ellas. No sé que estos elementos hubiesen sido desconocidos ni por la Inquisición. Los decretos supremos los desconocen sin embargo, y ordenan que en ausencia de todos ó algunos de los testigos, se proceda al debate y, por consiguiente, al pronunciamiento de la sentencia *con todo la lectura de sus declaraciones*. Declaraciones tomadas, sin citación del acusado, de testigos á quienes tampoco conoce, jamás han sido pruebas legales, no siendo en el único caso en que un reo continúa esperando para comparecer á juicio y vindicarse, la mazarie ó la ausencia de los testigos presenciales de su crimen. Este caso raro de necesidad han convertido los decretos reformadores del Procedimiento criminal en regla general y ordinaria, reduciendo el debate y la discusión, á la lectura de deposiciones de testigos sordos que no oyen, y mudos que no responden *sorda et muta testimonia*, y dé testigos cuya atestación no ha oido el acusado, y para cuya recepción no fué siquiera citado.

Las leyes antiguas y modernas sobre la prueba testimonial, en los juicios escritos criminales, están comprendidas en estas palabras: «En efecto, las declaraciones de los testigos del sumario (Escríche), como que se han prestado sin citación de la parte contraria, no hacen fe ni producen efecto legal para condonar al encausado por lo que de ellas resulte; son solamente indicaciones de cierto valor para lejitimizar el procedimiento, para tomar ciertas medidas precaucionales y para prestar y fundar la acusación; y así es que si se quiere que sirván de prueba para el objeto final de la causa, se hace indispensable, ó que la parte á quien perjudican las apruebe y se conforme con ellas, ó que se repitan en el plenario con presencia de citación de ella ó de su representante, no ya sólo para que pueda conocer á los testigos y asistir á su juramento

en para presenciar sus declaraciones y responden a las preguntas que le componen el examen. En Bolivia el jurado y las partes escuchan las pruebas orales, si las distancias, la población y el costo del viaje lo permiten, se trasladan al punto de la causa; si no, se acuerda en el juicio que se efectúa en el deserto territorio, el examen de los testigos y se les pide que se presenten en la corte. Si no se cumplen las ordenes, se les impone multa. Si se oponen obstáculos a la realización de aquellas instituciones, se les impone multa. La topografía y economía, elección de los jueces y legisladores, no nos podemos negar a la realización de todos los antiguos partidos y se les impone multa. Si no se cumple con la asequibilidad la prueba oral y el examen de los testigos, se les impone multa. Si se cumple con la actualidad, continuar con el examen de los testigos y se les impone multa. Si se cumple con la garantía de la justicia, se les impone multa. Si se cumple con la práctica han reconocido, se les impone multa. Si se cumple con la escritura, se les impone multa.

ratificación de los testigos.

En el examen de los testigos durante las diligencias preparatorias, se informa a las partes para todo evento que se produzca, para sustraer la ratificación de los testigos, se les informa de la ejecución de otros con previa citación y se les informa que los testigos que no comparezcan al debate ó comparezcan sin cumplir las disposiciones generales de la legislación. Las ratificaciones, siguen la forma establecida en el Código Criminal, deben hacerse ante testigos que no estén en la causa. Si se recibió la declaración preceptiva en la calidad ú otro vicio imputable al testigo, se le impone multa. En este género de ratificación los

Tan pronto se le lee al testigo su primera declaración para que se ratifique en ella, costumbre perniciosa que obligaba al testigo a insistir en ella, con perjuicio de la verdad, ó por amar propio, ó por temor de la pena de perjurio. Se le manda al testigo una nueva declaración con arreglo al interrogatorio que se le dirigió y absolvio con su primera disposición. Esta diligencia descubre la verdad del testimonio ó su falsedad. (art. 264). Tales son las reformas que el Proyecto ha introducido en las diligencias preparatorias para el debate.

Supresion del Banco de acusados.

El acusado, en el debate, abandonado así mismo, solitario y en una posición degradante, ocupa el banco llamado de acusados, que es una picota vergonzosa. Basta esta penosa situación para perturbar el ánimo del hombre mas resuelto y sereno. Mientras que el hombre no es condenado, conserva la integridad de sus derechos para no ser humillado. Por tal motivo el Proyecto (art. 285) ha suprimido el banco de acusados y ha dejado el señalamiento del asiento que debe ocupar el encausado en el debate á la prudencia del Presidente de la sala.

Forma de las sentencias condenatorias.

El Procedimiento criminal, sin distinguir las sentencias absolutorias de las condenatorias ni tener en cuenta el Código Penal para la calificación del delito y de su gravedad, apenas exigió su publicidad, la cita de la ley y la firma de los jueces y del secretario. El Proyecto (artículo 309) señala las

partes que debe contener una sentencia condenatoria sobre el hecho y el derecho, de manera que, calificado el hecho con todas sus circunstancias, la aplicación de la pena conforme con la calificación y el texto de la ley, trascrita textualmente en la sentencia, revelan la ciencia y la providad del juez ó condenan su error ó prevaricacion.

La sentencia de muerte no debe notificarse al reo.

Repuigna á los sentimientos de humanidad, al carácter suave de los bolivianos y á nuestras costumbres, la crueldad de la notificación de la sentencia de muerte al reo. Que á oídos los recursos de ley, la autoridad tenga la necesidad de cumplir este triste deber, la razon y la religion no solo escusen su cumplimiento sino que lo ordenan como un acto de caridad, al ejercerse con el hombre el último refinamiento de残酷; pero que antes de matar á un hombre, se anticipa su muerte y se le mate tantas veces, cuantos son los días y momentos que corren desde la notificación hasta que ejecutada la sentencia se le haga la intimación de que la sociedad y sus semejantes han resuelto que muera, es el *non plus* de la barbarie. El Proyecto autoriza á su defensor para que reciba la notificación de la sentencia de muerte y para que interponga contra ella los recursos legales. Ordena ademas que toda sentencia de muerte sea consultada de oficio. (Artículo 390 y 391.)

Razon por qué no se establecen nuevos tribunales de partido ni se restablecen los juzgados de letras.

El Proyecto habria establecido tribunales colegiados de 4.^o instancia en los treinta y dos partidos judiciales ó restablecido las antiguas judicaturas de letras, bajo el sistema del Procedimiento criminal. Cualquiera de estas organizaciones hubiera ofrecido ventajas mas importantes en el juicio criminal; pero no lo ha hecho por que la creacion de treinta y dos tribunales de partido debe ser el colorario de la solucion de esta cuestion económica. ¿Puede costearlos la Nacion? Resuelta ella afirmativamente por el Cuerpo Legislativo, una ley sencilla completaria el Proyecto sin alterar su sistema. Otro tanto digo sobre el restablecimiento de los jueces de letras. Si la Asamblea reforma la Constitucion que ha reconocido los tribunales de partido, bastaria esta ley. «Se restablecen los antiguos juzgados de Letras en las Provincias y Capitales de Departamento. Los jueces de letras ejercerán en materia criminal, las funciones que el Procedimiento criminal encarga al juez relator y á tribunales de partido.» Pero sin que se reforme la Caja, el Proyecto ofrece cuantas garantias son posibles y convinables con el forzado juicio escrito.

Apelacion en materia Criminal.

Es una consecuencia lógica del procedimiento escrito el recurso de apelacion. El procedimiento frances lo acepta en los juicios correccionales y de simple policia, por que siendo escritos ambos juicios, no habia ningun motivo para negar este recurso, indicado por la misma naturaleza contra los errores de los tribunales. No ofreciendo dos votos en los de partido una garantia del acierto, era aun mas necesario este recurso contra sus errores ante el tribunal mas inmediato cuya attribu-

ción natural es conocer en segunda instancia del fondo de las causas del hecho y del derecho, para confirmar ó revocar la sentencia de primera instancia.

El Proyecto ha arreglado este recurso á los principios reconocidos y no contestados por la ciencia. Los jueces de 2.^º instancia pueden exigir otras pruebas para su deliberación, y agotados los recursos de la indagación y del criterio, pronunciar el fallo definitivo sobre el hecho, aplicando también el derecho. Aquí concluye el juicio criminal; la cuestión del hecho está soberanamente resuelta por dos tribunales competentes por el número de sus magistrados y por la capacidad, probidad y experiencia de ellos; calidades que debemos suponer en todo enjuiciamiento. Mas, como á despecho de estas garantías, la ley ha podido ser violada, ya en las formas esenciales del procedimiento, ya en la aplicación del derecho, el Proyecto ha dejado el último extraordinario recurso á la Corte de Casación, reducida á funcionar en una esfera mas elevada que la que ocupan los tribunales de justicia, velando sobre el derecho, y nada mas que el derecho. Tales tambien el espíritu de la Constitución,

Criterio de las pruebas en 1^a y 2^a.

instancia.

El Proyecto se ha abstenido de establecer reglas para el criterio de los jueces de 1.^º y de 2.^º instancia. Indicaré brevemente sus motivos que hoy no los discute ya la ciencia, por que han pasado á ser principios.

La prueba testimonial es necesaria, pero peligrosa; pero mas peligroso es todavía el establecer reglas para formar el criterio legal. El legislador que lo sanciona, para que las

conciencias de los jueces se sujeten á él, como al único é infalible elemento de conviccion, propasa los límites del poder humano. Puede infundirse la persuacion, pero no mandarse; y en ese dédalo intrincado de presunciones y probabilidades que casi siempre resulta de la prueba testimonial, la pretendida certidumbre legal es una fuerza mayor, ímpuesta á la razon y á la voluntad. Por esto se ha creido siempre desde la mas remota antiguedad, que la íntima conviccion es independiente de la ley y no puede recidir siuo en la concienzia del juez. Consultado el Emperador Adriano sobre la fé que debe prestarse á los testigos, contestó: «Tu debes saber mejor que yo cuanta es la fé que debe prestarse á ellos» *Tu m̄gis scire debes cuanta fides adhibenda sit testibus.* Todavia fué mas lejos, ordenando que los jueces consultasen á su concienzia y se preguntasen así mismos los que ellos creian ó no creian probado. *Ex sententia animi tui te estimare oportere quid aut credas aut parum probatum tibi opineris.*»

Es verdad que se euentran en el cuerpo del Derecho civil algunos textos que indican la necesidad de dos testigos para formar una prueba; pero decir que dos testigos y no uno solo, pueden formar una prueba, no es decir que sus deposiciones reunidas la formen necesariamente. La consecuencia filosofica que puede deducirse de tales textos es que sin la deposicion uniforme, á lo menos de dos testigos, no hay lugar á la condenacion; pero no que el objeto de ellos sea reatar y forzar la concienzia de los jueces, para que habiendo dos atestaciones uniformes, los jueces, absuelvan ó condenen precisamente, aun tracionando su íntima conviccion.

En este caso el cuadro del combate que sufre el juez en los rejistros de su concienzia, es este: «Mi concienzia, dice el juez á un acusado, te absuelve por que no te encuentra cul-

pable; y te condeno sin embargo, por que existen contra ti pruebas que la ley declara suficientes; ó al contrario: «Mi conciencia te condena, y no obstante te absuelvo, porque hay para tu impunidad, pruebas que la ley declara bastantes.» Este es el tormento de la razon humana. Los códigos de pueblos cultos, y especialmente los franceses, sin duda que por estos motivos se han abstenido de fijar el criterio legal en lo criminal y civil.

Sin embargo de estos convencimientos, si se teme todavía la arbitrariedad de los jueces en la apreciacion de las pruebas, segun su intimo convencimiento, admitido el recurso de apelacion, en materia criminal, desaparece este temor. No hay razon de negar esta confianza á ocho ó nueve jueces letrados, cuando la lei francesa la concede á ocho jurados legos y cuando la lei de imprenta boliviana la concede tambien á seis ó siete jurados que forman sentencia. Si á pesar de esto se quiere establecer lo que se llama criterio legal, se puede hacer por un artículo comun á los juicios en materia criminal, correccional ó de simple policia, en estos términos: «En los juicios criminales, correccionales y de simple policia, los jueces de 1.^a y 2.^a instancia fallaran segun su conciencia, arreglada á la fé que merecen las pruebas, conforme á las disposiciones de la legislacion civil.»

Recurso de casacion.

La Constitucion de 1826 y la lei de 8 de Enero de 1827 establecieron por primera vez el recurso de casacion, *solo de sentencia que cause ejecutoria y cuando se haya contravenido a las leyes que arreglan el proceso ó falladose contra ley expresa y terminante cuyos efectos no podrán ser otros que reponerse el proceso al estado en que aparezca la nulidad.* He

aquí la Corte de Casacion con su única atribucion: declarar la nulidad y reponer el proceso al estado en que ella apareza. Estas leyes no designaron los tribunales a los que debian remitirse los procesos anulados, especialmente cuando la nulidad heria la sentencia por haberse pronunciado contra lei expresa, pero no puede dudarse de que declarando ellas que el único efecto de la nulidad era la reposicion del proceso al estado en que aparecia este vicio; no concedian á la Corte Suprema, la simultánea jurisdiccion para anular y fallar en el fondo. Su competencia estaba reducida, solo á reponer el proceso al estado en que aparecia la nulidad.

Las deplorables visitudes por las que ha pasado la Corte Suprema, como Corte de Casacion, dán lugar á creér que no fueron bien comprendidas las leyes de su creacion. Hubo decretos supremos que convirtieron la Corte Suprema en Tribunal de tercera instancia, concediendole la doble autoridad de anular y de fallar en el fondo, apreciando, por su puesto, nuevamente las pruebas de las dos instancias precedentes. Otros decretos hubo que restituyeron la Corte Suprema á su primitiva planta, pero omitieron fijar la suerte que debian correr las sentencias y los procesos anulados. Leyes han existido tambien, como el Código de Procederes y la lei de Organizacion judicial que han concedido competencia á las Cortes Superiores y á los tribunales de partido para conocer de los recursos de nulidad, convirtiendo estos tribunales en Cortes de Casacion y creando por consiguiente, tantas jurisprudencias, cuantos son los tribunales competentes para casar procesos y sentencias.

La lei de 24 de Setiembre de 1851 es la única que correspondiendo al espíritu y al objeto del lejislador de 1826, y sin equivocar las funciones naturales de una Corte de Casacion, restablecio la competencia de la Corte Suprema para

anular y reponer el proceso, y cuando la nulidad se hubiese declarado por haberse violado lei espresa en la desicion, para remitir el proceso, no al tribunal cuya sentencia fué anulada, sino á otro mas inmediato. Solo olvidò esta lei dos puntos mui importantes para completar la idea: separar el hecho del derecho y fijar el curso y suerte de los procesos, cuando por segunda ó tercera vez, insistiendo las Cortes en la sentencia anulada, insistiesen tambien las partes en el recurso de casacion.

**Término del recurso de casacion y
necesidad de consultar al
Cuerpo Legislativo.**

El Procedimiento Criminal llenó este vacío, por lo que toca á la separacion del hecho del derecho; pero tampoco fijó la última suerte de los procesos anulados, por que esto en Francia estaba resuelto por otras leyes posteriores al Procedimiento Criminal que no han sido incorporadas en él. El Proyecto, restableciendo la competencia de la Corte Suprema en los recursos de casacion por el artículo 348, ha señalado el último término de los procesos anulados por los artículos 384 y 382. Ambos artículos son una traducción fiel de la ley de 1.^o de Abril de 1837 que la Corte Suprema citó en su malhadado informe de 4 de Noviembre de 1859 al que fueron consiguientes los dos decretos de 20 de Noviembre del mismo año que segun la confesion del Ministro que los refrendó, desvirtuaron el sistema.

Segun dichos artículos no hai lugar sino á la segunda casacion de una sentencia pronunciada en una misma causa y entre las mismas partes: con ella queda resuelto definitivamente el asunto; mas como en este caso la contradiccion entre la Corte de Casacion y las dos Cortes Superiores

sobre la inteligencia d^e una lei, indica que su texto es obscuro y su sentido incierto, nace la necesidad de la consulta al lejislador. Tal es el término de los recursos de nulidad sobre el derecho, artículo 382.

Otro vicio de nulidad.

El Proyecto ha señalado otro vicio de nulidad y es el que nace de una sentencia incompleta, irregular ó contradictoria, en la calificación del hecho. No hay un texto ni en el procedimiento frances que indique esta nulidad, pero en su jurisprudencia está reconocida y es muy corriente, por que en estos casos no hay sentencia, y por consiguiente la nulidad de la que tiene apariencias de sentencia, es manifiesta.

Cuando se ha casado un proceso por omision ó violacion de las formalidades que la lei prescribe bajo pena de nulidad, segun el sistema del Procedimiento Criminal, debe remitirse para nueva audiencia y sentencia á otro tribunal distinto de aquel cuya sentencia fué anulada. El Procedimiento Criminal consultó con la condicion humana para no flar el proceso á jueces que habian ya prejuzgado. El Proyecto habria respetado este sistema, si el fuese compatible con el territorio y la poblacion de Bolivia. Si dentro de los limites de un distrito es muy dificil el comparendo de los testigos, saliendo de ellos, los obstáculos serian mayores, casi insuperables. As i es que forzado por la ley inexorable de la necesidad, el Proyecto prescribe en este caso una excepcion del principio, á saber, la devolucion del proceso anulado al mismo tribunal. Otro tanto ordena cuando la sentencia se ha casado por ser ella incompleta, irregular ó contradictoria (artículo 372).

Por delitos comunes todo funcionario público es juzgado por los Tribunales de partido.

La Constitucion ha abolido los casos de corte que el Procedimiento Criminal concedió á ciertos funcionarios públicos. Ella misma ha señalado la competencia de la Corte Suprema y de las Superiores para juzgar á otros funcionarios públicos. Tambien está abrogada la necesidad de la previa licencia del Gobierno para el juzgamiento de los empleados en la administracion. El Proyecto respetando la Carta y estas innovaciones inherentes á nuestra forma de Gobierno, ha innovado casi completamente el capítulo 3.^o título 5.^o del Procedimiento criminal. Su articulo 421 declara que todo funcionario público civil, eclesiástico ó militar está sometido para su juzgamiento á los tribunales y jueces establecidos en él por los delitos que cometa fuera del ejercicio de sus funciones, en materia criminal, correccional ó de simple policia.

Juicio contra el Presidente de la República y Ministros de Estado.

El articulo 422 dispone que los funcionarios públicos designados en el articulo 343 del Código Penal sean tambien juzgados por los jueces y tribunales ordinarios en materia criminal, correccional ó de simple policia, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, con excepcion de los que deben ser juzgados por la Corte Suprema de justicia y por las superiores de distrito. En consecuencia de este principio, el Proyecto ha arreglado el procedimiento contra el Presidente de la República y los Secretarios de Estado, cuando la Asamblea ha decretado la acusacion contra ellos y los ha

sometido á juicio. En este procedimiento se observan todas las reglas y garantías que ofrece el Proyecto en el juicio criminal, en cuantó no se oponen á los trámites especiales designados para el juzgamiento de estos altos funcionarios. La sentencia se pronuncia en plena sala, y son necesarios á lo menos cinco votos para formarla.

Contra los agentes diplomáticos y otros funcionarios.

Para el juicio de los Ministros ó Agentes diplomáticos ó consulares, de los ministros de las Cortes de Distrito, de los Fiscales de Distrito y de los Jefes políticos de las Capitales de Departamento que deben ser juzgados por la Corte Suprema, segun la Constitucion, el Proyecto ofrece un procedimiento especial que no escluye los trámites y garantías que concede el procedimiento comun. Como contra estos funcionarios no se ha decretado la acusacion y es preciso dar principio al juicio por la instrucción sumaria, se ha dividido la Corte Suprema en dos salas, atribuyéndose á la primera la instrucción la acusación y la primera instancia; y la segunda á la segunda sala.

La competencia de la primera sala en tres funciones distintas que el procedimiento concede á diferentes tribunales, es efecto de la necesidad: la Corte Suprema no puede dividirse sino en dos salas, otra subdivision por ejemplo, para decretar la acusación, carecería de los elementos que la ciencia requiere como garantías del acierto. Habiendo solo dos salas, es una necesidad atribuir á la primera la instrucción, acusación y primera instancia, con apelación á la segunda, no solo de la sentencia definitiva, sino tambien del auto de culpa y de otros que segun el procedimiento comun son apelables.

Fuera de la irregularidad indicada, el procedimiento

contra los Ministros diplomáticos y demás funcionarios señalados en el N.^o 4.^o del artículo 65 de la Constitución, ofrece cumplidas garantías á la sociedad y al encausado. En el parrafo 4.^o sección 2.^a capítulo 3.^o título 5.^o del Proyecto estan indicados los procedimientos ante la Corte Suprema de justicia contra los funcionarios indicados y contra el Presidente de la República y Secretarios de Estado.

Contra los jefes políticos de provincia y otros funcionarios

El párrafo 2^o de la misma sección contiene el procedimiento ante las Cortes de Distrito contra los Jefes políticos de las provincias, Intendentes de Policía, Vocales de los Tribunales de partido, Jueces Instructores, Fiscales de partido y Ajentes fiscales, por los delitos que ellos cometen en el ejercicio de sus funciones. La primera Sala de la Corte Suprema decreta la acusación, despues que un Ministro instructor ha completado el sumario y se pasan los obrados á la Corte del distrito correspondiente, para que tengan lugar ante ella los procedimientos comunes hasta la sentencia contra la que no hay otro recurso que el de nulidad.

Penas disciplinarias.

Faltaba en el Procedimiento Criminal un capítulo consagrado á la disciplina de los tribunales. La ley penal y las de procedimiento, ántes de ahora, reconocian en los tribunales, competencia para imponer penas disciplinarias; pero ellas se referian para su imposición á otras leyes que no han sido todavía dictadas. La necesidad de la disciplina contra los jueces y oficiales del ministerio y contra los subalternos de los tribunales era sentida y reclamada. Cuando estos desempeñan sus funciones con negligencia ó comprometen la dignidad de su carácter, sin incurrir en delitos que causen una

formal responsabilidad, es necesaria una represión que los contenga en los límites del deber. Ha grazado un error funesto y es, que los oficiales del ministerio público que pretender ser considerados, solo como agentes del Poder Ejecutivo, no son responsables ni pueden ser reprimidos por sus demasías y faltas. Los artículos del Código penal 397 y 398, no están abrogados; pero fuera de los casos en que estos funcionarios pueden ser juzgados criminalmente, por que nuestras instituciones desconocen funcionarios irresponsables, eran necesarias tambien las penas disciplinarias.

El Proyecto no ha inventado esta novedad, la ha tomado de la ley de 20 de Abril de 1840, promulgada después del Procedimiento Criminal francés que lo modificó y complementó; y reformado nuestro procedimiento, era útil y necesario incorporar en él esta ley. (Capítulo 4.^o, tít. 5.^o)

En las recusaciones y otros procedimientos particulares y de interes público del Procedimiento Criminal, el Proyecto ha indicado tambien varias reformas cuya utilidad libro al criterio de VG. por medio de la comparacion de ellos. Temo abusar de su paciencia con un informe mas detallado.

Conclusion.

VG. dejó á mi arbitrio proponer las reformas del Procedimiento Criminal, de manera que ó puedan intercalarse en el Código ó formar leyes suplementarias. Me he dedicado á incorporarlas en el cuerpo del Procedimiento, creyendo que este método será mas ventajoso para todos y particularmente para los hombres de ley que encontraran en un solo volumen todas las leyes sobre el enjuiciamiento criminal, sin necesidad de buscar instituciones suplementarias. No hay duda que para

la historia de la lejislacion y para la ciencia, pudo ser mas conveniente dejar el Procedimiento en su forma primitiva. La comparacion de él con las leyes de su reforma ofreceria á las jeneraciones venideras el progreso ó el retroceso de la lejislacion criminal; pero como el Procedimiento Criminal no ha de perecer, he creido mas útil preferir las ventajas prácticas incontestables con la incorporacion de la reforma en el Procedimiento.

Por lo demas, á pesar de que mis trabajos han sido formulados sobre datos de que no he podido prescindir, y que al contrario he debido respetar, la reforma que ofrezco á VG. no es nueva. El lejislador no debe inventar, debe seguir las ideas y costumbres que se renuevan y suceden en la sociedad. Si me hubiese dejado conducir por la belleza de las teorias, yo habria ofrecido á VG. un Proyecto que tal vez hubiese complacido á la imaginacion, como una de tantas poesias que se escriben en politica, en lejislacion, en moral y en la reorganizacion de las sociedades; pero consultando con la historia, con la filosofia y la práctica, me he limitado á ofrecer á VG. un Proyecto que puede realizarse, un Proyecto que en la filiacion de las lejislaciones que nos ofrecen los siglos, corresponde á nuestra situacion y á la necesidad que ella nos impone de continuar todavia con el juicio escrito. Me será muy satisfactorio que el Proyecto merezca la aprobacion de VG. ó al menos su induljencia.

Sucre, Junio 18 de 1862.

Sr. Ministro.

Andres María Torrico.

*E Am
4/5/107*

